

Imprimir

Este artículo tiene dos partes. En la primera, veremos cómo el ELN aumenta la violencia y rechaza la construcción de paz, y en la segunda, se destacan las acciones de comunidades afectadas, que le exigen cada vez más al ELN que pare la violencia, y al gobierno, que construya paz con los territorios.

ELN: aumenta la violencia y rechaza la construcción de paz

2024, otro año perdido en el propósito que el llamado Ejército de Liberación Nacional (ELN) acabe su levantamiento armado. El cese al fuego de seis meses, prorrogado hasta completar un año, expiró empezando agosto. La delegación del gobierno anunció el 10 de agosto, que habían recibido la instrucción del presidente Petro de hacer una propuesta para descongelar la mesa de conversación y reactivar el cese al fuego. Sin embargo, no lograron reconstruir el diálogo ni poner en marcha lo acordado en mayo en Caracas, de realizar el primer punto de la agenda de negociación: la participación de la sociedad civil.

El ELN no aceptó destrabar las conversaciones ni extender el cese al fuego. En cambio, aumentó su violencia y el control de territorios -con secuestros, desplazamientos de poblaciones, uso de menores de edad, asesinatos, retenes en vías, restricción de derechos ciudadanos, economías ilícitas, negocios criminales, etc.[1]-. Genera miedo para tratar de obligar al silencio. El ELN dijo que consideraría la extensión de la tregua si el Gobierno lo retiraba del listado de Grupos Armados Organizados (GAO), mediante un decreto que publicara antes del 23 de agosto[2]. Y, a cambio, ofreció que, en señal de buena voluntad, no atacaría a la fuerza pública, salvo para defenderse. Pero lo que el ELN ha buscado es el reconocimiento de beligerancia para quedar facultado, entre otras cosas, a actuar como “estado dentro de otro estado”.

Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz, mostró que el retiro de los GAO lo ha pedido el ELN siempre, y se les ha negado. Además, pidió que antes de reactivar los diálogos, el ELN debe comprometerse -ante el pueblo colombiano, la Iglesia, los garantes, la comunidad internacional-, a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

De nuevo, del 19 al 25 de noviembre, las partes se reunieron y acordaron realizar a comienzos de 2025 una evaluación del desarrollo de los acuerdos, introducir correctivos, evitar acciones que debiliten el proceso de negociación, evaluar y definir la continuidad del cese al fuego, y empezar a desarrollar la agenda de negociación. Estando en medio de esa reunión, el 24 de noviembre el ELN realizó el atentado con explosivos contra la base militar de Puerto Jordán, en Arauca. Ya había planteado como situación problemática, la relacionada con Comuneros del Sur, que el 7 de mayo 2024, se separó del ELN y emprendió una negociación con el gobierno nacional, por lo cual el ELN solicitó un veto o desautorización de Otty Patiño -consejero y comisionado presidencial, que negocia con Comuneros la entrega de armas y su transición a la vida civil. Pero, como bien dice Iván Cepeda, en las negociaciones ninguna delegación puede vetar a miembros de su contraparte, y hay que cumplir el acuerdo de reunirse a principios de 2025 y llevar los diálogos de paz a territorios como Arauca, Chocó, sur de Bolívar, Catatumbo[3].

Al profundizar su violencia, el ELN aumentó la desconfianza y presión nacional e internacional para que concrete el fin de su accionar armado. Tanto la Iglesia Católica y organizaciones sociales en Colombia, como Naciones Unidas y países garantes insistieron en la necesidad de concretar el acuerdo de paz[4].

Población muestra grave afectaciones y exige verdaderas soluciones

Los territorios con mayores problemáticas y marginamientos han visto en 2024 agravar su situación con la actuación del ELN. Por ejemplo, en Chocó, el frente de guerra Occidental, hizo un paro armado desde agosto. El Foro Interétnico Solidaridad Chocó le exigió al ELN que se comprometiera con el cese al fuego, un acuerdo humanitario y la terminación de su levantamiento armado, pues como ha mostrado el Comité Internacional de la Cruz Roja, ese departamento es el más afectado en Colombia[5]. Y la población le pidió al Estado que no solo reaccione ante situaciones como ésta, sino que genere soluciones estructurales que contribuyan a terminar la violencia.

En el Cauca también la situación es dramática por los enfrentamientos en el Cañón del Micay

del ELN y la Segunda Marquetalia, o con el Ejército Nacional[6]. El otro eje clave de acción del ELN es la frontera con el mayor vecino de Colombia -en departamentos como Arauca y Norte de Santander, aprovechando que el régimen de Maduro facilita que se refugien en estados venezolanos como Apure, Amazonas, Barinas, Bolívar, Táchira, Zulia[7].

Por toda la violencia ejercida por el ELN, en distintas regiones, amplios sectores de la sociedad y activistas sociales -indígenas, campesinos, profesores, excombatientes-, le exigen a esa guerrilla respetar la vida de las personas y las comunidades, acabar con todas sus acciones violentas contra la población e incluso de destrucción de la infraestructura. Para avanzar en la negociación hacia la paz, también le exigen no intensificar la violencia, valorar lo ya pactado -como acuerdos parciales o avances en las mesas sobre temas cruciales, así como el apoyo de los puentes tendidos para el acercamiento, con la activa participación de la Iglesia, de países garantes, de organismos como Human Rights Watch, el Carter Center, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.-. Todo eso ayuda a posibilitar y desarrollar la negociación para terminar ese conflicto armado.

El líder del ELN, 'Pablo Beltrán', ha dicho que las extorsiones y los secuestros -a los que se refiere como "impuestos" y "retenciones"- son "operaciones de finanzas" que no hacían parte de lo pactado, y que no abandonarán las armas hasta que logren transformaciones profundas que permitan una paz estable. Sin embargo, no asume que esos cambios sustanciales requieren que la guerrilla acabe esa acción armada que agrava la situación, en especial de comunidades marginadas. Además, la estructura descentralizada del ELN y la autonomía operativa de sus frentes de guerra restringen la capacidad del Comando Central (COCE) para articular la acción de sus miembros; éstos actúan según sus propias prioridades e intereses, en especial económicos y de control territorial.

Aunque el ELN ha asumido algunos compromisos en la mesa de negociación, sus frentes mantienen acciones de extorsión, secuestro, desplazamiento, y buscan control sobre zonas estratégicas y sus fuentes de financiación. Por eso las comunidades afectadas están reaccionando y han mostrado cómo la concentración en disputas territoriales entre actores ilegales impide la negociación de paz. De hecho, en los últimos años, las infracciones al DIH

aumentaron en al menos 65 municipios, principalmente en aquellos afectados por la disputa territorial entre el ELN y otros grupos armados[8].

Como han mostrado líderes sociales y estudiosos del tema, esa guerrilla no asume el cese al fuego como herramienta real de desescalamiento de hostilidades sino como medio para fortalecer sus estructuras y estrategias, en especial territoriales; y sus frentes más belicistas se resisten a desmovilizarse convirtiéndose en fuertes obstáculos para construir la paz. Así, para que la reanudación de la mesa de diálogos sea exitosa, es clave que ambas partes hagan esfuerzos preparatorios específicos, constantes y consistentes; que el gobierno aborde las realidades territoriales que agudizan el conflicto y adopte medidas que estimulen la acción nacional y local para superar esas problemáticas; que genere una política de seguridad fundamentada en la defensa de los derechos humanos, el fomento de la paz y el fortalecimiento de la democracia; que el ELN asuma que luego de 60 años de lucha armada y 30 años de intentos fallidos de negociación, le debe poner fin a su levantamiento armado, aprovechando que sus mandos actuales están llegando a una edad de retiro. Para eso les es fundamental evitar que sus frentes territoriales se consagren a las economías ilegales causando daños dramáticos en especial a poblaciones indígenas, afros, campesinas; e impedir que sigan abusando de las mujeres convirtiéndolas en víctimas de violencia sexual; y parar los desplazamientos y confinamientos a las comunidades, el reclutamiento y abuso de niños/as, la destrucción de la naturaleza, etc.

[1]

https://www.sur.org.co/dos-anos-de-compromiso-con-la-paz-y-la-persistencia-del-conflicto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dos-anos-de-compromiso-con-la-paz-y-la-persistencia-del-conflicto

[2] <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/ojo-al-eln/11ag24>

[3] ELN también solicitó un veto o desautorización a Otty Patiño -consejero y comisionado presidencial.

[4]

<https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/propuesta-confidencial-de-gobier-no-petro-a-guerrilla-del-eln-para-descongelar-mesa-de-paz/>

[5]

<https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/asi-se-vive-la-crisis-por-paro-de-eln-en-c-hoco-comunidades-piden-solucion-a-petro/>

[6]

<https://www.infobae.com/colombia/2024/08/07/tras-el-fin-del-cese-al-fuego-ya-se-registro-el-p-rimer-combate-entre-el-ejercito-y-el-eln-este-es-el-balance/>

[7]

<https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/eln-ha-consolidado-su-presencia-en-ocho-estados-d-e-venezuela->

[8] <https://razonpublica.com/la-paz-total-las-negociaciones-eln-proceso-multiples-desafios/>

Socorro Ramírez

Foto tomada: El Nuevo Siglo